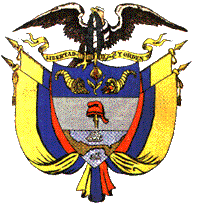
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD**

**DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

**SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá, veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020). Hora 8:35 p.m.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO No.** | **11001 – 3334 – 003 - 2020 - 000076- 00** |
| **CLASE:** | **HABEAS CORPUS** |
| **ACCIONANTE:** | **JUAN BAUTISTA CASTAÑO MARTÍNEZ** |
| **ACCIONADO:** | **POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – ESTACIÓN DE POLICÍA BOSA Y OTROS** |

Procede el Despacho a pronunciarse respecto de la acción constitucional de Habeas Corpus interpuesta por **JUAN BAUTISTA CASTAÑO MARTÍNEZ** identificado con la cédula de ciudadanía 19.442.666, en contra de la **POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – ESTACIÓN DE BOSA “TEQUENDAMA”,** el **JUZGADO 23 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ,** el **JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOACHA,** el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ,** y como vinculado el **CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ.**

1. **IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE**

Se trata del señor **JUAN BAUTISTA CASTAÑO MARTÍNEZ** identificado con la cédula de ciudadanía 19.442.666, actualmente recluido en la Estación de Policía 7 de Bosa.

1. **DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO**

El accionante aduce que se está vulnerando su derecho a la libertad personal.

1. **COMPETENCIA:**

De conformidad con el numeral primero del artículo 2 de la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006 y por Acuerdo PSAA 07-3972 del 13 de marzo de 2007, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, este Despacho es competente para conocer de la presente acción de HABEAS CORPUS.

1. **LA PRETENSIÓN.**

Solicita el libelista, que se conceda la acción constitucional de Habeas Corpus, en favor del señor **JUAN BAUTISTA CASTAÑO MARTÍNEZ,** concediéndole la libertad; en caso contrario se le se reintegrado el subrogado de detención domiciliaria o subsidiariamente se le remita a un centro de diagnóstico especializado en salud.

1. **HECHOS**

En el escrito de Habeas Corpus, se relata:

1. El accionante manifiesta que el día 4 de marzo de 2020, fue aprehendido y detenido en la estación TEQUENDAMA, bajo el argumento que se le había revocado la sustitución de detención domiciliaria, presumiéndose que ya está solucionada su situación jurídica.
2. Elevó solicitud el día 25 de marzo de 2020, con radicado 056541, ante el Centro de Servicios Administrativos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, respecto al subrogado penal; solicitud que no ha sido contestada hasta la fecha, prolongando su detención de manera injustificada.
3. Manifiesta que no se encuentra revocada la detención domiciliaria, ni en el sistema del INPEC (institución nacional penitenciaria y carcelaria) ni de la Rama Judicial.
4. Señala que cumple con los requisitos para acceder al beneficio sobre pena impuesta, según el precepto de la sentencia 015 de 2018, por lo que se debe reintegrar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad en centro carcelario, según los preceptos del artículo 63 del código penal.
5. Indica que ostenta la calidad de cabeza de hogar frente a su familia, tanto en sentido moral, psicológico y económico, por lo que se debe aplicar el artículo 314 código procesal penal; en cuanto lo descrito anteriormente para acceder a dicho beneficio.
6. Considera que la estación séptima de bosa “Tequendama”, no es un centro que garantice su seguridad sanitaria y de salud, como tampoco cuenta con ninguno de los profesionales necesarios para la contingencia actual frente a una posible filtración del virus COVID 19.
7. Señala que se debe dar aplicación al Decreto ley 457 de marzo de 2020 y 546 articulo 2 numeral A (personas mayores de 60 años) de abril de 2020, con el fin de garantizar la salud de la población carcelaria y descongestión de la misma.

1. **TRÁMITE**

La acción constitucional de habeas corpus fue presentada ante el Centro de Servicios Civil – Laboral – Familia Tutelas, el 28 de abril de 2020 a las 10:08 a.m.

La misma se recibió por correo electrónico en este Juzgado el 28 de abril a las 1:32 p.m. Mediante auto de la misma fecha, el Despacho admitió la acción constitucional, teniendo como accionados a la **POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – ESTACIÓN DE BOSA “TEQUENDAMA”,** el **JUZGADO 23 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ,** el **JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOACHA,** y al **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ.**

Por auto del 29 de abril de 2020, se requirió al accionante para que remitiera copia de la solicitud de reintegración del subrogado de prisión domiciliaria, radicada en el **CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ,** y en providencia se la misma fecha, se ordenó vincular a dicho centro de servicios.

La notificación de las citadas providencias se surtió mediante correo electrónico del 28 y 29 de abril de 2020, respectivamente, tanto al accionante como a cada una de las accionadas.

1. **CONTESTACION**
   1. **DIJIN - INTERPOL**

Como repuesta al requerimiento realizado en el auto admisorio, el administrador del sistema de información de antecedentes penales y/o anotaciones, así como órdenes de captura de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), informó las anotaciones respecto del señor Juan Bautista Castaño Martínez, de las cuales se relacionan las siguientes relevantes para el presente caso:

**SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE**

OFICIO: 0357 del 08/06/2018 INSTANCIA: 1a Instancia

PROCESO: **257546100000201600034**

CONDENA: PRISIÓN: 54 meses

AUTORIDAD: JUZGADO 01 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO

BENEFICIO: **SUBROGACIÓN CONCEDIDA**

MPIO/DPTO: SOACHA, CUNDINAMARCA FEC.

DECISIÓN: 25/04/2018

DELITO: FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES (VIGENTE)

SENTENCIA CONDENATORIA

**SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE**

OFICIO: 3190

PROCESO: **80035**

AUTORIDAD: JUZGADO 01 CIRCUITO CON CONOCIMIENTO

MPIO/DPTO: SOACHA, CUNDINAMARCA

FEC. DECISIÓN: 22/07/2011

INSTANCIA: 1a Instancia

DELITO: FABRICACION Y TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES (VIGENTE)

SENTENCIA CONDENATORIA

**ORDEN DE CAPTURA VIGENTE**

OFICIO: 2936 del 13/09/2018 NRO. O.C.:

2936

PROCESO: **257546100000201600034**

FECHA O.C.: 01/08/2017

AUTORIDAD: JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

DELITO: FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES (VIGENTE)

FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA

MPIO/DPTO: FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA

MOTIVO O.C: CUMPLIR CONDENA

**MEDIDA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE**

OFICIO: SIN NUMERO. NRO. MEDIDA: 1124

PROCESO: **201581080**

FECHA MEDIDA: 30/06/2016

AUTORIDAD: JUZGADO 02 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON

FUNCION CONTROL GARANTIA

MPIO/DPTO: SOACHA, CUNDINAMARCA T

IPO: MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

DELITO: CONCIERTO PARA DELINQUIR (), FABRICACION Y TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES (), HOMICIDIO AGRAVADO (), TRAFICO,

FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ()

OBSERVACIÓN: \*2575461080002201581080, DECRETO DETENCIÓN PREVENTIVA EN LUGAR DE RESIDENCIA

Así mismo, informó que el accionante figura NEGATIVO respecto a circulares a nivel internacional.

* 1. **ESTACIÓN DE POLICÍA BOSA**

Dicha autoridad, indicó que el señor Juan Bautista Castaño Martínez se encuentra detenido en dichas instalaciones, a la espera de ser trasladado por parte del INPEC, al centro carcelario que se disponga, dado que existe boleta de detención 027 del 05 de marzo de 2020, proferida por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá, quien solicita tener al condenado privado de la libertad por el delito de fabricación, porte, o tenencia de armas de fuego, con condena de 54 meses de prisión.

Así mismo, indica que al momento de la captura se diligenciaron las respectivas actas de derechos del capturado y constancias de buen trato.

**7.3 JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGA – SEDE SOACHA**

Dando respuesta al Habeas, el Juez informa que le correspondió por reparto ejecutar la sentencia 2018-00424, correspondiente al proceso radicado 257546100000201600034, en el cual mediante sentencia del 1 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Soacha, condenó al señor Juan Bautista Castaño Martínez a la pena principal de 54 meses de prisión, como responsable por el delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, negándole el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Señala que el 05 de marzo de 2020, la Policía Metropolitana de Bogotá deja a disposición el capturado, a fin de legalizar su privación de la libertad, circunstancia que se materializó en la misma fecha, a través de la boleta de detención 027; por lo que, con oficio 0847 remitió el proceso a su homólogo en Bogotá, correspondiendo por reparto al Juzgado 23 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Por lo anterior, solicita su desvinculación de la presente acción constitucional.

**7.4 JUZGADO PRIMERO PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE SOACHA**

Respondió la presente acción constitucional, informando que en ese Despacho cursó el proceso con radicación 257546108002201600034, caso 2466, seguido en su contra del aquí accionante por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y que con fecha primero de agosto de 2017, emitió sentencia por preacuerdo, condenándolo a la pena principal de 54 meses de prisión, en calidad de cómplice del delito antes mencionado, negándose la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero concediendo el sustituto de la prisión domiciliaria. Decisión contra la cual no se interpuso recurso cobrando su ejecutoria.

Señaló que el 19 de octubre de 2017, se remitió la actuación al Centro de Servicios Judiciales de esa ciudad, con oficio 759, a fin de que se expedirse las comunicaciones de rigor a las autoridades pertinentes y su respectivo envío al Juzgado de Ejecución de Penas competente, sin que hasta la fecha hayan regresado o se tenga conocimiento del estado actual de las mismas.

Motivo por el cual se solicita la desvinculación de la presente acción de habeas corpus.

**7.5 JUZGADO 23 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ**

Dicha autoridad judicial, se refirió a la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de Soacha, dentro del proceso 257546108002201600034, y señaló que la medida sustitutiva de prisión domiciliaria quedo supeditada, conforme los requisito de ley, a que el condenado pagara la caución prendaria respectiva y suscribiera la diligencia de compromiso; requisitos que no acreditó, por lo que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá profirió la correspondiente boleta de detención.

Informa que, el día de hoy recibió radicado interno 11879, mediante el cual el apoderado del señor Bautista Castaño, solicita se reintegre el subrogado de prisión domiciliaria, por lo que mediante auto de la misma fecha avocó conocimiento de la ejecución de la pena y requirió el cumplimiento de la caución y diligencia de compromiso para poder hacer efectiva el sustituto de la prisión domiciliaria.

Afirma además, que en todo caso resulta más favorable para el condenado cumplir con las exigencias para el beneficio concedido en la sentencia en mención, que aplicar el Decreto legislativo 546 de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria y carcelaria, dado que no ha allegado la documentación que se requiere para su estudio y porque la misma solo se concedería por el término de 6 meses, vencido el cual deberá retornar al centro carcelario definido.

Por lo anterior, considera que en presente caso no se cumplen las exigencias para acceder al amparo solicitado, dado que la privación de la libertad se encuentra amparada en orden de autoridad judicial competente, debiendo resolverse cualquier solicitud sobre su situación jurídica al interior del proceso, y no mediante esta acción constitucional que es excepcional y que en todo caso, la aplicación de la medida solicitada no implica la libertad del condenado, quien a la fecha no ha cumplido en su totalidad los 54 meses de prisión a que fue sometido en sentencia judicial ejecutoriada.

7.6 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ

El coordinador de dicho centro, informó que al revisar el Sistema de Gestión Justicia Siglo XXI, al accionante le figura el proceso 25754610000020160003400, actuación con preso, el cual vigila el Juzgado 23 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Luego, al verificar la ficha técnica se observa que aquel fue condenado por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Soacha – Cundinamarca a una pena de prisión de 4 años y 6 meses; y que mediante auto de 29 de abril de 2020, el despacho ejecutor ordeno requerir al hoy accionante para que acredite pago de caución y suscriba diligencia de compromiso, tramite de notificación que se surtirá por el Centro de Servicios por intermedio del notificador asignado por correo electrónico institucional.

Refiere que las competencias propias de esa oficina estriban únicamente en el ingreso oportuno de la correspondencia y peticiones a cada uno de los jueces que hacen parte de la especialidad, al igual que emitir los oficios, comunicaciones, y surtir las notificaciones ordenadas a través de providencias, por lo que considera que la presente acción resulta improcedente respecto de su actuación.

1. **MATERIAL PROBATORIO RECAUDADO**

* Información sistematizada de antecedentes penales y/o anotaciones, así como órdenes de captura de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), respecto del señor Juan Bautista Castaño Martínez.
* Copia de sentencia proferida por el Juzgado 01 Penal con Función de Conocimiento de Soacha, del 01 de agosto de 2017, y su auto aclaratorio del 25 de abril de 2018, dentro del proceso 257546108002201600034, mediante la cual se condenó al señor Juan Bautista Castaño Martínez, a la pena principal de 54 meses de prisión, como cómplice del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones; así como se concede la sustitución de la pena de prisión, por prisión domiciliaria, previa suscripción de diligencia de compromiso y caución prendaria.
* Informe secretarial y providencia proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, de fecha 13 de septiembre de 2018, en la cual se deja constancia de la no comparecencia dentro del término dispuesto, del señor Juan Bautista Castaño Martínez para suscribir diligencia de compromiso y allegar la caución impuesta, con ocasión del beneficio de la prisión domiciliaria, y que en el lugar de su residencia no se encontró al sentenciado; por lo que dispuso librar la correspondiente orden de captura y tuvo como parte cumplida de la pena el tiempo comprendido entre el 29 de junio de 2016 y 01 de agosto de 2017, tiempo que estuvo con medida preventiva de aseguramiento de prisión domiciliaria.
* Copia del oficio 2936 del 13 de septiembre de 2018, emitido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, dirigido a las autoridades de policía y policía judicial, para hacer efectiva la orden de captura contra el señor Bautista Castaño, con pena privativa de 54 meses de prisión, la cual tiene anotación de cancelación, por haberse hecho efectiva el 05 de marzo de 2020.
* Copia del oficio emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá, el día 05 de marzo de 2020, dirigido al juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, mediante el cual deja a disposición de dicha autoridad judicial, al señor Juan Bautista Castaño Martínez, quien había sido capturado el 04 de marzo de 2020 en la Localidad de Bosa – Bogotá, cuando realizaban labores de patrullaje y verificación de antecedentes, encontrando en las bases de datos de la SIJIN, que dicha persona se encontraba con orden de hacer cumplir condena de prisión de 54 meses por el delito de porte, fabricación, tenencia de armas de fuego o municiones.
* Copia de acta de derechos del capturado y constancia de buen trato, de fecha 04 de marzo de 2020.
* Providencia del 05 de marzo de 2020, emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, en la cual se legaliza la captura del aquí accionante y ordena librar boleta de detención ante el Complejo Penitenciaro y Carcelario La Modelo de Bogotá, solicita la custodia al Comandante de la Estación de Policía Bosa E-7, remite el asunto por competencia a los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá y ordena la cancelación de ordenes de captura anteriores por el mismo asunto.
* Copia de boleta de detención proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, en contra del señor Juan Bautista Castaño Martínez, de fecha 05 de marzo de 2020.
* Copia del oficio 856541 del 25 de marzo de 2020, a través del cual el apoderado del señor Castaño Martínez, solicita se le reintegre el subrogado de prisión domiciliaria y se le remita de manera inmediata a un centro especializado en afecciones pulmonares, dado el cumplimiento de más de las tres cuartas partes de la pena, que ostenta la calidad de cabeza de hogar y que cuenta con más de 60 años de edad.
* Autos del 29 de abril de 2020, proferidos por el Juzgado 23 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante los cuales, asume por competencia la ejecución de la pena impuesta en la sentencia del 01 de agosto de 2017, en contra del hoy accionante, así como requiere al condenado el pago de la caución y suscripción de la diligencia de compromiso, advirtiéndole que una vez acreditado su cumplimiento, puede acceder a la medida sustitutiva de prisión domiciliaria, y ordena oficiar al centro de detención donde se encuentra el accionante, adoptar la medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del interno; resuelve estarse a lo dispuesto en la sentencia condenatoria respecto al beneficio de la prisión domiciliaria, previo el cumplimiento de los requisitos ya descritos, y se abstiene de decidir sobre la prisión domiciliaria transitoria de que trata el Decreto 546 de 2020.
* Copia de historia clínica del año 2009, donde se evidencia que el señor Juan Bautista Castaño Martínez, padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

1. **CONSIDERACIONES**

La acción constitucional de habeas Corpus, consagrada en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentada por la Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006, está encaminada a tutelar la libertad individual de las personas en aquellos eventos en que se encuentre privada de tan fundamental derecho con violación de sus garantías constitucionales y legales, o cuando dicha situación de privación se prolongue ilegalmente.

En ese sentido, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de hábeas corpus, como una acción reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

De igual modo, el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria sobre estados de excepción), contempla el hábeas corpus dentro de los derechos intangibles.

En ese orden de ideas, el habeas corpus es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política y reconocido, además, en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.

En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Por ello, el derecho a la libertad no es absoluto, pues este afronta su restricción cuando el ciudadano es objeto de un proceso penal adelantado con base en el respeto del debido proceso y del derecho de defensa también constitucionalmente reglados.

El Habeas Corpus, se encuentra consagrado en el artículo 30 de la carta fundamental, así: *"...Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas...-"*; norma que fue desarrollada por la Ley 1095 de 2006, que en su artículo primero lo define como un derecho fundamental y a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien se encuentra privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o esta se prolongue ilegalmente, acción que se debe resolver en el término de 36 horas.

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el hábeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:

1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2o y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000) y la captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007).
2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley para que el servidor público: a) lleve a cabo la actividad a que está obligado b) adopte la decisión correspondiente al caso (por ejemplo: definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras).

En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el habeas corpus procede frente a dos motivos o situaciones amplias y genéricas: i) cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente[[1]](#footnote-1).

Por tanto reitera el Juzgado, que la figura del habeas corpus es de carácter supletorio y residual, pues comporta una tutela específica para amparar la libertad, en el entendido de que solamente es admisible en cuanto el afectado no cuente con instrumentos idóneos para lograr la corrección de las irregularidades en su contra, y solamente tendrá viabilidad en la medida en que la vulneración sea actual.

**Análisis del caso concreto:**

En el caso en cuestión, el accionante manifiesta que se encuentra ilegalmente privación de la libertad, por cuanto asegura, no se ha cumplido la sustitución de la pena en prisión domiciliaria, ni se ha resuelto la solicitud de reintegración de dicho beneficio.

Para resolver el sub examine, de conformidad con la información suministrada y el material probatorio recaudado, encuentra esta primera instancia, que contra el señor Juan Bautista Castaño Martínez, se adelantó proceso penal con radicado 257546108002201600034, por parte del Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de Soacha, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, como cómplice; proceso dentro del cual se dictó sentencia definitiva condenatoria, con pena principal de 54 meses de prisión y su sustitución por prisión domiciliaria, previa suscripción de diligencia de compromiso y caución prendaria.

La ejecución de la sentencia, correspondió al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, quien emitió providencia el 13 de septiembre de 2018, en la cual dejó constancia de la no comparecencia dentro del término dispuesto, del señor Juan Bautista Castaño Martínez para suscribir diligencia de compromiso y allegar la caución impuesta, con ocasión del beneficio de la prisión domiciliaria, ya que en el lugar de su residencia no se encontró al sentenciado. Así, dispuso librar la correspondiente orden de captura y tuvo como parte cumplida de la pena el tiempo comprendido entre el 29 de junio de 2016 y 01 de agosto de 2017, tiempo que estuvo con medida preventiva de aseguramiento de prisión domiciliaria.

Así, en virtud de la orden dada por la mencionada autoridad judicial, la Policía Metropolitana de Bogotá, dentro actividades de patrullaje y verificación de antecedente, encontró que el hoy accionante se encontraba transitando por las calles de la Localidad de Bosa y por tanto, procedió a hacer efectiva la orden cumplimiento de la sentencia condenatoria en su contra, procediendo a su captura, y poniéndolo a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha, quien impartió legalidad a la misma y libró la correspondiente orden de captura, colocándolo bajo custodia del Comandante de la Estación de Policía Bosa E-7.

Además, se observa que el Juzgado 23 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, asumió por competencia el conocimiento del asunto, mediante providencia del 29 de abril de 2020, y en atención a la solicitud efectuada por el apoderado del condenado, dispuso requerirlo al pago de la caución y suscripción de la diligencia de compromiso, advirtiéndole que una vez acreditado su cumplimiento, podría acceder a la medida sustitutiva de prisión domiciliaria. Igualmente, ordena oficiar al centro de detención donde se encuentra el accionante, adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del interno.

Bajo este contexto, es del caso en primer orden traer a los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, que se encuentran contenidos en los artículos 38 y 38B del Código Penal, así:

***“ARTICULO 38. LA PRISIÓN DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN.****<Artículo modificado por el artículo*[*22*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014.html#22)*de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine.*

*El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia.*

***PARÁGRAFO.****La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión.*

***ARTÍCULO 38B. REQUISITOS PARA CONCEDER LA PRISIÓN DOMICILIARIA.****<Artículo adicionado por el artículo*[*23*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014.html#23)*de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*

*1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.*

*2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del artículo*[*68A*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html#68A)*de la Ley 599 de 2000.*

*3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.*

*En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.*

*4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:*

*a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;*

*b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*

*c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*

*d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión.*

*Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.”* (Subraya el Juzgado)

Pues bien, está probado en el expediente que la privación de libertad tiene su origen en la orden de captura proferida por autoridad competente – Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá – Sede Soacha-. De tal manera que, no se configura una detención ilegal, pues la captura se llevó a cabo en ejecución de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 01 Penal con Función de Conocimiento de Soacha, con pena principal de 54 meses de prisión.

Tampoco se observa alguna irregularidad por la supuesta ausencia de materialización de la sustitución de la pena en prisión domiciliaria, dado que en efecto, mediante sentencia del 01 de agosto de 2017, el Juzgado Penal de Conocimiento, accedió a la solicitud de redención de la pena, ordenando cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria; quedando esta supedita a actuaciones que corresponde efectuar directamente a aquel – suscripción de acta de compromiso y constitución de caución prendaria -.

En este sentido, si bien a la fecha no se ha materializado la sustitución ordenada en favor del aquí accionante, ello no configura una prolongación indebida o ilegal de la privación de la libertad, en tanto que para ello, él mismo debe demostrar el cumplimiento de precisos requisitos exigidos por la Ley, los cuales no se encuentran acreditados aún.

Cabe advertir que, pese a que el señor Juan Bautista Castaño Martínez, tenía vigente una condena y una orden de captura, fue aprehendido al encontrarse circulando libremente en la ciudad de Bogotá, y que luego de lograrse su captura y encontrarse recluido en la Estación de Policía Bosa 7, solicitó la reintegración del beneficio de prisión domiciliaria, sin que tampoco en esa oportunidad ni al momento de proferirse la presente sentencia, acreditara el cumplimiento de los requisitos previos para su materialización.

Ahora bien, en relación con la aplicación de la prisión domiciliaria transitoria de que trata el Decreto 546 de 2020, debe advertirse que la autoridad judicial competente (Juzgado 23 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá) ya efectúo pronunciamiento dentro del curso ordinario del proceso penal, indicando que pese a que el condenado cumple con alguna de las causales del artículo 2 del mencionado decreto, como son: tener más de 60 años de edad, padece trastorno pulmonar, la pena no supera los 5 años de prisión, y el delito no se encuentra dentro de aquellos excluidos; no se ha allegado por parte del penal, la cartilla biográfica y antecedentes judiciales del penado, por lo que advierte que por el momento no puede efectuar resolución de fondo. Además advierte, que en todo caso el beneficio que ya fue concedido al señor Juan Bautista Castaño Martínez desde el año 2017, resulta más favorable por cuanto no se encuentra limitado en el tiempo, contrario a lo ocurre con aquel contemplado en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, la cual sólo se encuentra contemplada por el término de 6 meses.

Por lo anterior, debe recordarse que cuando existe un proceso judicial en curso, el *hábeas corpus* no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas[[2]](#footnote-2).

Igualmente, se recuerda que en los casos en que la privación de la libertad está respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben formularse dentro del cauce ordinario respectivo y haciendo uso de los recursos legales existentes, admitiéndose que sólo en eventos extraordinarios se justifica la procedibilidad de la acción de *hábeas corpus,* cuando la actuación judicial constituya una auténtica vía de hecho y contra la misma no proceda algún recurso[[3]](#footnote-3).

Por tanto, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado, se deben elevar al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de *hábeas corpus*, a menos que, valga reiterarlo, se esté frente a una vía de hecho que haga razonable advertir el advenimiento de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios[[4]](#footnote-4).

Pues bien, en el presente caso hechas las precisiones precedentes, se tiene que el accionante pretende hacer efectivo un beneficio como lo es la sustitución de la prisión intramural, por la domiciliaria, sin acreditar los requisitos de ley para su materialización. Sin embargo, como lo señaló la Juez natural, la misma ya fue concedida en la sentencia condenatoria, pero no se ha efectuado por negligencia propia del interesado, de manera que no puede pretender omitir el cumplimiento de los mismos, a través del presente mecanismo constitucional.

Así las cosa, este Juzgado observa que el actor acudió en forma alternativa al juez constitucional para reclamar un derecho que se encuentra decidido por el juez natural, **y frente al cual, es él quien no cumplido los requisitos para su materialización**, aunado al hecho de que como se indicó, no existe fundamento para ordenar la libertad, fin último de la acción de habeas corpus, dado que en todo caso, sigue vigente el cumplimiento de la sentencia condenatoria de 54 meses de prisión, de la cual sólo ha trascurrido 14 meses y 26 días.

Así mismo, pese a que se encuentra historia clínica del año 2009, donde se evidencia la afección pulmonar que padece el accionante, no se probó en el presente trámite que este actualmente presenta un estado de salud deficiente o que no se ha brindado la atención médica que haya podido requerir en virtud de ello, que amerite su traslado un centro de atención especializado como lo solicita, aunado al hecho de que el Juez natural ya ordenó al centro de reclusión donde se encuentra actualmente privado de la libertad, que adopte la medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal, y por tanto, corresponde a dicha autoridad judicial velar por su cumplimiento.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el actor se encuentra privado de la libertad como consecuencia de la orden de captura emitida por autoridad judicial competente, dada sentencia condenatoria en su contra, la cual goza de presunción de legalidad, así como se advierte, ya había ordenado la sustitución de la pena, por prisión domiciliaria, misma pretensión de la solicitud de *habeas corpus,* la cual es materia de discusión al interior del proceso penal que se adelanta en su contra, todo ello, trae como consecuencia jurídica la improcedencia de las pretensiones de la presente acción constitucional.

1. **DECISION**

En mérito de lo expuesto, el Juez Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** **NEGAR** la acción pública de HABEAS CORPUS interpuesta por el señor JUAN BAUTISTA CASTAÑO MARTÍNEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

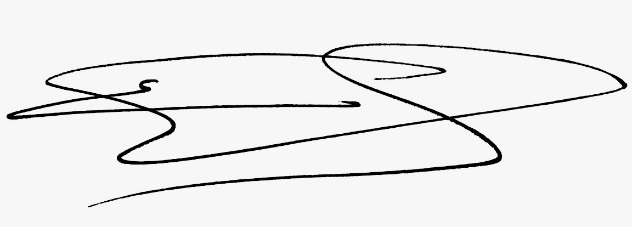
**SEGUNDO: Notificar** de la manera más expedita al señor JUAN BAUTISTA CASTAÑO MARTÍNEZ, según correo electrónico que se enuncia en el escrito de interposición de la acción constitucional, remitiendo copia de la presente providencia.

**TERCERO: Notificar** de la manera más expedita a la POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – ESTACIÓN DE BOSA “TEQUENDAMA”, el JUZGADO 23 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOACHA, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ,y al CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ.

**CUARTO:** En caso de que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3) días calendario siguiente a su notificación, **archívese** el expediente.

Firmada digitalmente en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veinte (2020) a las ocho y treinta y cinco (8:35 pm).

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

****

**ERICSON SUESCUN LEÓN**

**Juez**

*D.C.R.P.*

1. Proceso No. 35896 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL - Magistrado Ponente: ALFREDO GOMEZ QUINTERO, providencia del 23 de febrero de 2011. [↑](#footnote-ref-1)
2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Magistrada Ponente: PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR,

   AHP – 7422 – 2015, Radicación n° 47307, providencia del 16 de diciembre de 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, MP. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, AHP1906-2018, Radicación No. 52704, providencia del 11 de mayo 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, MP FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, AHP4922-2017, Radicación No. 50855, providencia del 3 de agosto 2017. [↑](#footnote-ref-4)